

## Limita la aplicación del cobro en Unidades de Fomento (UF) en los casos que indica

Boletín 15779-03

### Cuadro 1: Breve historia de la creación de la UF en Chile

La Unidad de Fomento tiene su origen en marco de la Ley N°16.253, bajo el Decreto N°40 del Ministerio de Hacienda promulgado el 02 de enero de 1967. Esta normativa tuvo como objetivo otorgar nuevas herramientas para el fomento del desarrollo del país con la creación de bancos de fomento que utilizarían la UF como el mecanismo de reajuste de los préstamos otorgados.

En su origen la UF se reajustaba de forma trimestral según la variación que hubiese experimentado el IPC durante ese periodo. Desde 1975 la frecuencia de reajuste fue mensual para que ya en 1977 su reajuste se determinó con frecuencia diaria para los períodos comprendidos entre el 10 de cada mes y el 9 del mes siguiente, según la variación que haya experimentado el IPC en el mes calendario inmediatamente anterior (Argüello, Wilkins y Holz, 2023). A la fecha es el Banco Central el organismo encargado de realizar el cálculo de la UF en base a la variación del IPC informada por el INE.

La motivación central para el establecimiento de la UF era que, ante un escenario de alta inflación e inestabilidad, la UF permitía un reajuste automático para los instrumentos de ahorro y préstamo, aumentando así los incentivos para la interacción entre los bancos y las personas.

### I. ¿En qué consiste el proyecto de ley?

En abril del 2023, los Diputados Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini con el patrocinio de un grupo de otros parlamentarios, ingresaron como moción el proyecto de ley que busca limitar el uso de la Unidad de Fomento (UF) como mecanismo de reajuste monetario en diversos contratos que norman el acceso a bienes y servicios esenciales para la vida de las familias tales como: arriendo de viviendas, pagos de establecimientos educacionales (matrícula, aranceles, etc), planes de salud ofrecidos por las ISAPRES, créditos hipotecarios, entre otros. La centralidad de la moción está puesta en que, para los casos identificados, en que los contratos tienen característica de ser *contratos de adhesión*<sup>1</sup>, las obligaciones de pago sean estipuladas exclusivamente en pesos chilenos, evitando así el reajuste diario de la UF como resultado de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Entre los argumentos presentados se encuentran que (i) la UF fue creada en 1967 para enfrentar la inflación y facilitar el financiamiento de largo plazo, en marco de la Ley N°16.253<sup>2</sup> que autorizaba el establecimiento de bancos de fomento, siendo extendido su uso al día de hoy de forma indiscriminada y lejos de su objetivo inicial, y (ii) el que las familias tengan que asumir pagos en UF mientras sus ingresos siguen denominados en pesos provoca que, ante escenarios inflacionarios, aumenten de forma automática bienes y servicios esenciales (arriendos, aranceles de educación, salud, cuotas de créditos, etc), sin sueldos que experimenten un reajustes al mismo ritmo, implicando sobreendeudamiento o exclusión de estos servicios.

Desde una perspectiva jurídica y económica, se puntualiza en que el uso indiscriminado de la UF implica:

<sup>1</sup> Son aquellos contratos que están predefinidos por el proveedor y donde el consumidor debe adherir o aceptar con su firma lo propuesto, sin posibilidad de modificar este contrato. <https://www.sernac.cl/portal/607/w3-article-1580.html>

<sup>2</sup> Ley derogada el 29 de abril de 1980

- Desequilibrio contractual, dado que muchos de los contratos celebrados en UF son de adhesión, donde las personas no tienen capacidad de negociación.
- Desregulación de los costos, los que crecen a una velocidad mayor que los ingresos de las personas, dificultando la planificación financiera de las familias pues los esperados costos fijos terminan siendo variables.
- Traslado automático de alzas de precios a los consumidores, especialmente a quienes tienen contratos de largo plazo como resultado de la indexación al IPC, beneficiando desproporcionadamente a proveedores de servicios.

La propuesta legislativa contempla modificaciones legales específicas para establecer como requisito que los contratos de sectores específicos se expresen sólo en pesos chilenos:

- Reformar la ley de arrendamiento urbanos para que las rentas se fijen en pesos
- Modificar la normativa educacional para impedir cobros en UF
- Ajustar la legislación sanitaria para que los planes de salud privada estén en moneda nacional
- Prohibir expresamente que los créditos hipotecarios y de salud se pacten en UF

## II. Experiencia internacional

La UF es una figura única en Chile, sin embargo, sus características de índice de reajustabilidad que permite expresar precios y contratos en una unidad que varía según la inflación sí existe en otros países para proteger el valor real de contratos frente a variaciones de precios.

### • Unión Europea

La Unión Europea cuenta con un instrumento llamado Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)<sup>3</sup> que permite comparar la inflación entre los estados miembros. Si bien este indicador es utilizado por algunos países para el reajuste automático de contratos públicos y privados, esto debe conversar con la normativa de protección al consumidor establecida por la misma organización de estados.

Uno de los ejes rectores de la protección al consumidor refiere a las cláusulas contractuales abusivas, las que deben ser justas propendiendo a no crear desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los consumidores y los proveedores. Entre las condiciones potencialmente abusivas que se identifican, se encuentran: la modificación unilateral de los términos del contrato sin motivos válidos e informados (como una modificación en el valor de la cuota a pagar) o variación de precios a partir de cláusulas contractuales. Adicionalmente, según la normativa dada por la organización de países, si bien establece que el Euro es la única unidad monetaria de curso legal, no impide que dos partes acuerden expresamente usar otra moneda para pactar precios, pagos o cláusulas contractuales, siempre y cuando sea por acuerdo de ambas partes, no afecte la legislación nacional sobre el uso de monedas extranjeras y se cumpla con la transparencia contractual en marco del derecho de las y los consumidores. El uso del dólar para pactar contratos tiene como objetivo protegerse de eventuales escenarios de inflación interna.

Francia, por ejemplo, si bien se permiten contratos que pacten reajustes en marco de la normativa de la UE, en caso del arriendo de viviendas se utiliza un índice conocido como el IPC *armonizado* pues no considera la variación del precio del tabaco ni de las rentas imputadas de viviendas (valor estimado del arriendo de las viviendas ocupadas por sus propietarios). El IRL (Índice de Référence des Loyers) tiene como propósito evitar alzas abusivas en los contratos de arrendamiento, lo calcula y publica trimestralmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia (INSEE), y se

---

<sup>3</sup> [https://www.ine.es/prensa/ipca\\_prensa.htm](https://www.ine.es/prensa/ipca_prensa.htm)

puede aplicar como máximo una vez al año y sólo si el contrato lo indica expresamente (no es automático).

- **Estados Unidos**

En Estados Unidos es permitido indexar contratos privados a la inflación, utilizando como instrumento para ello el Consumer Price Index (CPI) como base de reajuste, en tanto esto se encuentre indicado expresamente en el contrato pactado. Este es un índice publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS) que tiene expresiones regionales, por categoría y nacional.

En el caso de California, existen regulaciones respecto al uso del CPI para el reajuste del valor de alquiler. El año 2020 entró en vigencia la ley AB 1482 conocida como California Tenant Protection Act, normativa en la que se establecieron dos importantes elementos: (i) desalojo con causas justificadas y (ii) límite en el aumento de la renta. En cuanto al límite en el aumento de la renta se dispuso que los aumentos anuales de la renta no podían superar el 5% más el CPI anual del área metropolitana donde se ubica la vivienda, o al 10%, lo que sea menor. Esta regulación excluye a viviendas nuevas y a contratos de renta a corto plazo (entre otros criterios de exclusión).

- **Colombia**

En Colombia es también permitido pactar contratos que incorporen mecanismo de ajustes de precios, teniendo como base el IPC que es publicado mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El año 2003 entra en vigencia la Ley 820 que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana que permite que el contrato de arrendamiento se pacte en cualquier moneda o divisa extranjera, debiendo ser pagado en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado en la fecha en que se contrae la obligación (salvo disposiciones distintas contraídas por las partes). Adicionalmente, esta ley establece que el reajuste del canon de arriendo sólo es permitido de forma anual, con un máximo del 100% de la variación del IPC del año anterior.

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) fija un porcentaje máximo de aumento de matrículas y aranceles escolares para las instituciones privadas a partir de resoluciones anuales. Los reajustes permitidos se basan en criterios conocidos y establecidos por ley, que dependen de las características de cada institución. El incremento no puede ser superior al autorizado, aún si el IPC fuera mayor. La resolución de septiembre del año 2024 que indica los criterios revisados y su aplicación se encuentra [aquí](#). En el caso de la salud, los contratos pactados requieren que cualquier reajuste sea aprobado por la contraparte y su pertinencia es revisada por la Superintendencia Nacional de Salud.

### **III. Comentarios**

El reajuste de instrumentos de deuda, ahorro e inversión en base a la UF es ampliamente utilizado en Chile, incorporando cláusulas de reajuste en contratos de arriendo, educación, salud y otros pactados entre privados. El debate respecto a su regulación tiene defensores y detractores, estos últimos argumentan -entre otras cosas- su buen comportamiento en los años y la certidumbre que entrega a quienes enfrentan decisiones de ahorro, deuda o inversión de largo plazo. Estos argumentos no dejan de tener pertinencia, sin embargo, algo igualmente cierto es que la utilización de la UF implica asimetrías

entre quienes se pueden proteger de la inflación y quienes, sin reajustes de ingresos a esa misma velocidad, ven encarecidos sus servicios y bienes esenciales a diario.

Resulta importante destacar que, en base a la revisión de experiencia internacional, no se identifica que exista en el mundo una unidad de reajuste como la UF chilena, lo que dificulta poder comparar políticas que regulen su aplicación y permitan evaluar efectos posibles de su alcance. Ahora bien, lo que sí es transversalmente utilizado en el mundo es el reajuste en base a la variación de precios al consumidor (con sus distintas formas y particularidades según el país), lo que permite observar experiencias de regulación posibles de aplicar en marco del debate del proyecto de ley.

En los países revisados, se observa que éstos han establecido regulaciones en el sector vivienda, definiendo límites máximos de reajustes, periodicidad anual y garantías para los arrendatarios. Francia destaca en ello, con el diseño de un indicador de reajuste distinto al IPC. En otros sectores de interés no fue posible encontrar experiencias que destacar, salvo lo que realiza Colombia en cuanto al arancel de la educación escolar privada, la que sólo puede aumentar sus precios en marco de criterios y porcentajes establecidos vía resolución ministerial anual. En salud, en general se observa un rol protagónico de los órganos superintendentes de los países, quien determina la pertinencia o no de los reajustes en marco de indicadores como el Índice de Costos de la Salud (ICSA). De esta forma, existen experiencias para tomar como referencias y avanzar en regulación de los términos contractuales que se establecen en sectores como la vivienda, educación y salud, particularmente en cuanto a establecer límites de reajuste y periodicidad que aseguren condiciones equitativas entre oferentes y demandantes.

#### IV. Referencias

Argüello, S., Wilkins, J. y Holz, M. (abril 2023). Aspectos principales de la UF y el debate de su pertinencia. Biblioteca del Congreso Nacional. Asesoría Técnica Parlamentaria. Disponible [aquí](#)

Banco Central de Chile (s.f). Unidad de Fomento. Disponible [aquí](#).

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (s.f). Ley N°16.253 que autoriza el establecimiento de bancos de fomento. Disponible [aquí](#).

Comisión Europea (s.f).Cláusulas contractuales abusivas. Portal tu Europa. Recuperado el 16 de julio de 2025 [aquí](#).

Ministerio de Educación Nacional (septiembre 2024). Resolución 16763 de 2024: Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2025. Disponible [aquí](#).

Reglamento (CE) n° 974/98 del Consejo de 3 de mayo de 1998 sobre la introducción del euro. Disponible [aquí](#).

República de Colombia. Ley 820 de 2003: Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones. Recuperado el 16 de julio de 2025 [aquí](#).

## Anatocismo

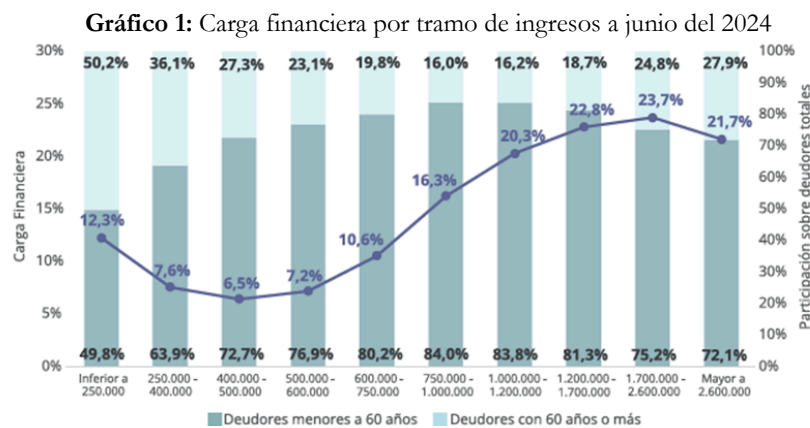
### Boletín N°13.150-03

#### Cuadro 1: Endeudamiento personas naturales en Chile

Informe sobre Endeudamiento 2024 - Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

Según el informe sobre endeudamiento del 2024 de la CMF, un 97,4% de los deudores en la muestra estudiada tiene algún tipo de deuda de consumo. En particular, el 46,1% mantiene deuda en tarjetas de crédito bancarias, un 8,6% con Emisores de Tarjetas No Bancarias (ETNB<sup>1</sup>) y un 64,2% en tarjetas de Sociedades de Apoyo al Giro (SAG<sup>2</sup>). En cuanto a los montos de deuda, la deuda de consumo representa un 25,5% del total de la deuda de los hogares, siendo los productos de mayor incidencia los créditos en cuotas con un 14,3%, las tarjetas de crédito bancarias con un 5,5% y las tarjetas SAG con un 4,5%. El 20,4% de los deudores indica tener una deuda hipotecaria, la que representa el 74,5% del stock de deuda total de los clientes bancarios.

En cuanto a la distribución de la deuda según tramo de ingresos, se observa (gráfico 1) que en el tramo de rentas inferiores a 250 mil pesos cuenta con una carga financiera superior a la registrada en segmentos de mayores ingresos, con una fracción mayoritaria de personas mayores como deudores.



Fuente: Informe sobre Endeudamiento 2024 - Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

Las tarjetas de crédito son un instrumento financiero de intensivo uso en nuestro país. Según los datos de la CMF, a diciembre del 2023, en Chile **existen alrededor de 14 millones de tarjetas titulares vigentes**, asociadas a 25 emisores de tarjetas de crédito (tabla 1).

**Tabla 1: Tarjetas de crédito vigentes a diciembre 2023**

Variable	Bancos	No bancos	Total
N° de tarjetas	11.914.048	2.433.191	14.347.239
N° emisores	14	11	25
Monto operaciones (MM\$)	4.008.496	133.810	4.142.305
Saldo crédito (MM\$)	12.689.829	926.071	13.615.900

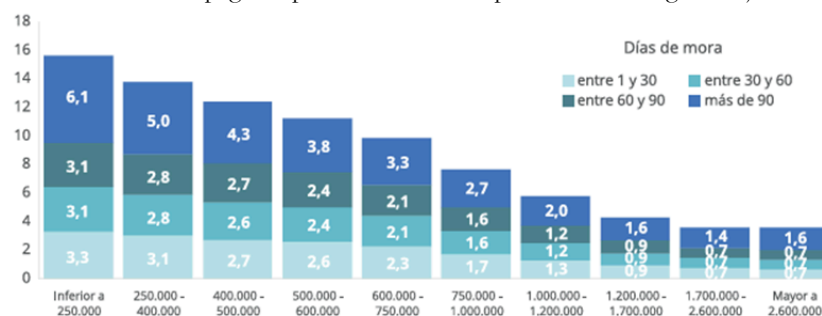
Fuente: Informe sobre Endeudamiento 2024 - Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

En cuanto a los deudores bancarios, a junio de 2024 se registran 411 mil con deuda impaga de uno o más días, lo que corresponde al 7,1% del total de deudores. Se observa que un 2% del total de deudores morosos tienen atrasos en el pago de sus obligaciones de 90 días o más. Tanto el monto moroso como el plazo en que se extiende la morosidad disminuye con el ingreso (tabla 2).

<sup>1</sup> Emisores de Tarjetas No Bancarias <https://www.cmfcile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-28994.html>

<sup>2</sup> Sociedades de Apoyo al Giro Bancario <https://www.cmfcile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-29001.html>

**Tabla 2:** Monto impago respecto a deuda total por tramos de ingreso a junio 2024



Fuente: Informe sobre Endeudamiento 2024 - Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

## I. ¿En qué consiste el proyecto de ley?

La propuesta legislativa correspondiente al Boletín N°13.150-03 tiene por propósito modificar las leyes N°18.010 que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero, y la ley N°19.496<sup>3</sup> que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para prohibir el **anatocismo** (entendido como el cobro de intereses sobre intereses) y regular las **cláusulas de aceleración** en los contratos de crédito.

Entre los elementos que fundamentan la propuesta se encuentra el endeudamiento estructural de los hogares chilenos, el que -a cifras del año 2018- alcanzaba un 73,3% del ingreso disponible de los hogares según cifras del Banco Central. Este endeudamiento, se diagnostica, es resultado de décadas de expansión de créditos, caracterizado por una alta presencia de sectores de menores ingresos, razón por la que terminan accediendo a instrumentos financieros con mayores tasas de interés y en condiciones contractuales más desfavorables.

En este escenario, el anatocismo aparece como una práctica que agrava la carga financiera de los deudores, pues el cobro de intereses sobre intereses posibilita que las deudas crezcan exponencialmente. En el caso de los contratos de consumo, esta práctica se agrava por la existencia de cláusulas de aceleración, las que permiten exigir el pago inmediato de toda la deuda, incluyendo intereses futuros. Esto, a juicio del proyecto de ley, vulnera la estabilidad financiera de los consumidores y perpetúa la condición de endeudamiento.

La revisión legal que fundamenta el proyecto de ley, indica que la ley N°18.010 permite el anatocismo convencional y se pacta expresamente, con la única limitación de no capitalizar intereses en períodos menores de 30 días. Por su parte, la Ley N°19.496, en el contexto de crédito al consumidor, establece que los intereses deben calcularse sobre saldos insolutos, aunque también permite, mediante acuerdo, el pago anticipado. Se plantea que estas normas, en conjunto, “forman un sistema permisivo que opera incluso sin requerir intervención judicial, lo que no tiene precedentes comparables en legislaciones extranjeras” (Boletín 13.150-03). Indica además que, históricamente, el anatocismo estuvo prohibido en Chile, primero por el Código Civil y luego por el Código de Comercio que lo permitía sólo en ciertos escenarios. Sin embargo, desde la dictación del Decreto Ley N°455 en 1974 y, especialmente, con la Ley N°18.010 en 1981, se introdujo legalmente el anatocismo incluso en casos de incumplimiento contractual sin necesidad

<sup>3</sup> Norma refundida por Decreto con Fuerza de Ley N°3 <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1160403>



de juicio previo. Este giro normativo es interpretado como parte de una reconfiguración del sistema económico chileno hacia la liberación del mercado financiero.

En suma, el proyecto de ley propone:

- Modificar el artículo 9 de la Ley N°18.010 para prohibir completamente el anatocismo, tanto en créditos como en indemnizaciones, considerando nulas las cláusulas que establezcan lo contrario.
- Modificar el artículo 38 de la Ley N°19.496 para prohibir expresamente el anatocismo en contratos de consumo y eliminar la posibilidad de exigir el pago anticipado de cualquier obligación nacida en estos contratos.

## II. Experiencia internacional

### ● Francia

El Código Civil francés es la base normativa que regula el anatocismo en dicho país. En particular, el artículo 1343-2<sup>4</sup> del texto indica que “los intereses devengados, exigibles durante al menos un año completo, producen intereses si así lo prevé el contrato o si una sentencia judicial lo especifica”. De esta forma, se establece que si bien existe la posibilidad de aplicar anatocismo, esto sólo se puede bajo condiciones claramente establecidas, tales como:

- Vencimiento de los intereses, no pudiendo aplicar anatocismo anticipado. Estos intereses deben haber estado devengados por al menos un año completo antes de capitalizarse y debe existir acuerdo posterior al vencimiento.
- Se trata de una demanda judicial requerida por el acreedor, siendo el juez quien determina el cobro de intereses sobre intereses.

En suma, los intereses que se encuentren en condición de mora, sólo pueden capitalizarse y generar nuevos intereses una vez que ha pasado al menos un año o exista una sentencia judicial que lo solicite. Adicionalmente, la jurisprudencia francesa ha interpretado la disposición del Código Civil de forma restrictiva, indicando que el anatocismo no puede derivarse de la inercia del deudor y no se admite en relaciones contractuales comunes, tales como líneas de crédito vinculadas con contratos de cuentas corrientes bancarias y tarjetas de crédito.

### ● España

El Código Civil español, en su artículo 1108<sup>5</sup> establece que “si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal”, mientras que el artículo 1109 expresa que “los intereses devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto”. Así, si bien no se prohíbe de forma explícita el anatocismo, tampoco se permite automáticamente pues es la jurisprudencia la que termina por definir su aplicación o no según sea el caso.

Complementario al Código Civil, la Ley de Condiciones Generales de Contratación (Ley N°7 de 1998) establece en su artículo 8 la prohibición de condiciones generales abusivas en los contratos convenidos, especialmente en condiciones que obliguen a una de las partes generando desequilibrios. También la Ley

<sup>4</sup> Código Civil Francés - [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article\\_lc/LEGIARTI000032035261](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032035261)

<sup>5</sup> Código Civil Español - [https://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Vacatio/v0-cc.l4t1.html](https://noticias.juridicas.com/base_datos/Vacatio/v0-cc.l4t1.html)

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley N°1 de 2007<sup>6</sup>, define como una acción abusiva, la obligación al consumidor a pagar cantidades desproporcionadas como indemnización o penalización por mora.

En definitiva, la normativa es menos expresa que la del caso francés, sin embargo, existe una robusta protección al consumidor y aplicación en la jurisprudencia que posibilita la anulación de cláusulas de capitalización de intereses en contratos de adhesión por ser consideradas abusivas.

- **Colombia**

En el caso de la legislación colombiana, el Código Civil, en su artículo 2235 indica textualmente “Se prohíbe estipular intereses de intereses”. Adicionalmente, en el mismo cuerpo normativo, su artículo 1617 establece que “Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización está sujeta a: 1ª) Se siguen debiendo los intereses convencionales (...); 3ª) Los intereses atrasados no producen interés; 4ª) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”. De forma complementaria a ello, el Código de Comercio Colombiano en su artículo 884 regula el límite de intereses y sanción por exceso, estableciendo tres condiciones que deben cumplirse de forma simultánea para aplicar el cobro de intereses sobre intereses, las que son:

- Pacto expreso, es decir, no se presume ni se puede aplicar unilateralmente
- Posterior al vencimiento de los intereses
- Que los intereses vencidos correspondan a un período no inferior a un año

De esta forma, al igual que en las otras experiencias internacionales revisadas, el anatocismo está regulado expresamente en la norma y la jurisprudencia de los tribunales, en particular la Superintendencia Financiera de Colombia, ha reiterado que la aplicación de anatocismo sólo es legal si se ajusta al artículo 884. Adicionalmente, intereses moratorios podrían ser aplicados en tanto exista una decisión judicial expresa tras ser requerido en una demanda judicial<sup>7</sup>.

### III. Comentarios

Al comparar la legislación chilena sobre anatocismo con otros países del mundo, se observa que sólo en Chile existe una normativa que expresamente permite aplicar el cobro de intereses sobre intereses como regla general y de forma automática sólo estableciendo como condición el vencimiento/renovación de una operación y la aplicación por períodos no inferior a 30 días (artículo n°9, Ley N°18.010), incluyendo en ello relaciones de consumo y sin requerir intervención judicial. Tanto en los casos de Francia, España y Colombia, limitan estrictamente su aplicación, estableciendo condiciones de tiempo de vencimiento, intermediación judicial y pacto expresa de las partes.

Regular el anatocismo y establecer condiciones para su aplicación da cuenta de una legislación con enfoque protector del deudor, promoviendo la información de quien pacta un compromiso en dinero. En caso de la legislación internacional revisada, en los países con enfoque protector del deudor, el anatocismo nunca puede operar de forma automática, mientras que en Chile la permisividad facilita su aplicación indiscriminada, incluso en contratos de adhesión. Esta práctica agrava el sobreendeudamiento crónico

<sup>6</sup> Ley N°1 de 2007 - Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios  
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555>

<sup>7</sup> Jurisprudencia de aplicación norma en Colombia  
<https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/19016/normativaconceptos-y-jurisprudencia-conceptoshistorico-doctrina-y-conceptos-antiguos-superintendencias-bancaria-y-de-valores-doctrinas-y-conceptos-financieros-indice-general-intereses-sobre-intereses-19016/>



pues los intereses capitalizados provocan que las deudas crezcan exponencialmente entre capital prestado y monto final adeudado.

Cuando existen condiciones contractuales desiguales (contratos de adhesión) entre entidades bancarias y consumidores, el anatocismo sin regulación podría implicar la adquisición de una deuda sin conocimiento real de su alcance. Además, en consideración de la asimetría de información, el anatocismo puede ser una vía para ocultar cobros excesivos, estableciendo una condición de deudor extendida en el tiempo, incluso habiendo pagado el monto del capital solicitado varias veces.

En suma, la legislación chilena resulta una anomalía al ser comparada con legislación internacional, destacando su alta permisividad y falta de mecanismos de control judicial o condiciones para la aplicación de intereses sobre intereses. Establecer modificaciones a la normativa vigente, incorporando mecanismos de regulación, harán posible establecer un enfoque de protección al consumidor y proporcionalidad de las obligaciones financieras tomadas.

#### IV. Referencias

Banco Central de Chile (20 mayo 2014). Presentación del Banco Central de Chile respecto del Proyecto de Ley que Modifica la Ley N°18.010, prohibiendo el cobro de intereses sobre intereses. Disponible [aquí](#).

Código Civil Francés (versión vigente 1 octubre 2016). Artículo 1343-2. Disponible [aquí](#).

Código Civil Español (s.f). Artículo 1108. Disponible [aquí](#).

Código Civil Colombiano (s.f). Artículo 1617. Disponible [aquí](#).

Código Civil Colombiano (s.f). Artículo 2235. Disponible [aquí](#).

Comisión para el Mercado Financiero (enero 2025). Informe de Endeudamiento 2024. Disponible [aquí](#).

Ley N°18.010 de Chile (27 junio 1981). Establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que indica. Disponible [aquí](#).

Ley 7/1998 de España (13 abril 1998). Sobre condiciones generales de la contratación. Disponible [aquí](#).

Real Decreto Legislativo 1/2007 (16 noviembre 2007). Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Disponible [aquí](#).